



PODER JUDICIAL DEL
ESTADO DE OAXACA



"2024, Bicentenario de la integración de Oaxaca a la República Mexicana"

CONSEJO DE LA JUDICATURA

Oficio número: PJEO/CJ/DPI/UT/00.01.01/0846/2024

Folio número: UTPJEO/0260/2024

Folio PNT: 201175024000260

Asunto: Respuesta a solicitud

Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oax., octubre 04 de 2024.

C. *****.

PRESENTE.

De conformidad en lo dispuesto por los artículos 45, fracciones III, V y XII, 136 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 71 fracciones III, VI y X, 128 y 123 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca; en atención a la petición de folio 201175024000260, se da respuesta con base a lo emitido por los Juzgados de Control del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca.

A la pregunta 1: Se hace de su conocimiento que los Juzgados de Control con sede en; Putla Villa de Guerrero, Villa Sola de Vega, Ejutla de Crespo, Miahuatlán de Porfirio Díaz, Santiago Pinotepa Nacional, San Francisco Tanivet Tlacolula de Matamoros, Puerto Escondido, Asunción Nochixtlán y San Pedro Pochutla; informaron a esta Unidad de Transparencia que después de realizar una búsqueda minuciosa dentro de sus archivos, no han emitido órdenes de protección fuera de juicio o durante el procedimiento.

No obstante, el Juzgado de Control con sede en Huajuapán de León ha dictado una orden de protección fuera del proceso, asimismo el Juzgado de Control de Salina Cruz, reportó que cuenta con 3 resoluciones donde se dictaron órdenes de protección, por lo que se anexan a la presente 4 versiones públicas de dichas resoluciones.

A la pregunta 2: Respecto al procedimiento de dictado de las órdenes de protección y el procedimiento que deben de seguir las mujeres víctimas de violencia, se informa que puede solicitar una orden de protección si es víctima de violencia familiar y/o de género, siempre y cuando la víctima esté en situación de riesgo, se puede realizar de manera verbal o escrita. En el caso de que la víctima se encuentre en una situación extrema de violencia puede pedirla a cualquier persona que esté al tanto o tenga conocimiento de la situación, asimismo, se puede solicitar la colaboración a la Secretaría de las Mujeres, de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca o a las Organizaciones de la Sociedad Civil, quienes realizan acompañamiento, asesoría jurídica y psicológica, para que la soliciten a nombre de la víctima.

En el caso de que la víctima sea menor de edad, se puede pedir a la Procuraduría de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de Oaxaca, para que la soliciten a nombre de la víctima.

Es obligación de la persona servidora pública, así como de las autoridades estatales y municipales (síndicas y síndicos) que emita la orden de protección a favor de la víctima, y no es necesaria la presentación de una queja, denuncia, demanda o que exista un proceso judicial para solicitar la orden de protección.

Cabe aclarar que dichas órdenes de protección no son definitivas, pero son prorrogables.

Por otra parte, es importante hacer mención que en el ámbito judicial existen medidas similares a las órdenes de protección denominadas: las medidas provisionales o de protección en materia familiar y las medidas de protección en materia penal, por lo que su diferencia radica en:

Órdenes de Protección	Medidas provisionales o de protección en materia familiar	Medidas de protección en materia penal
No depende de que exista una denuncia o un	Se dictan generalmente como parte de un procedimiento judicial, por ejemplo, en	Se dictan para proteger a la víctima desde el inicio de la denuncia y/o carpeta de



CONSEJO DE LA JUDICATURA

procedimiento judicial de por medio.	materia familiar se dictan para proteger a la víctima y en su caso a sus hijas e hijos.	investigación. De acuerdo al artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales, son emitidas, inicialmente, por el Ministerio Público; sin embargo, dentro de los cinco días siguientes a su emisión, el Poder Judicial puede cancelarlas, ratificarlas o modificarlas cuando se ordena lo previsto en las fracciones I, II y III.
--------------------------------------	---	---

A la pregunta 3: En términos de nuestra legislación estatal, su otorgamiento corresponderá a las autoridades administrativas:

- Síndico Municipal
- Fiscalía General del Estado (Ministerio Público)
- El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO).

Asimismo, pueden otorgarlas los órganos Jurisdiccionales:

- El Poder Judicial del Estado (Juezas y Jueces)
- El Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca.

Hay dos tipos de órdenes de protección que se pueden solicitar: administrativas y jurisdiccionales.

La decisión de donde acudirá la víctima dependerá del tipo de orden que se emita.

A manera de ejemplo; el ministerio público o fiscal más cercano a la población de la víctima, puede emitir órdenes de protección a favor, sin la necesidad de que se presente una denuncia alguna o exista una carpeta de investigación; se emiten a la luz de los principios de debida diligencia y del estado de necesidad de la víctima, y estas pueden ser, entre otras, las siguientes:

- Desocupación por el agresor, del domicilio conyugal o donde habite la víctima, independientemente de la acreditación de propiedad o posesión del inmueble, aún de los casos de arrendamiento del mismo.
- Prohibición al probable responsable de acercarse al domicilio, lugar de trabajo, de estudios, del domicilio de las y los ascendientes y descendientes o cualquier otro que frecuente la víctima.
- Retención y guarda de armas de fuego propiedad del agresor o de alguna institución privada de seguridad, independientemente si las mismas se encuentran registradas conforme a la normatividad de la materia.

Además de las órdenes de protección, el ministerio público puede emitir otros mecanismos similares como es la medida de protección, cuando se estime que el imputado representa un riesgo inminente en contra de la seguridad de las mujeres, la infancia y adolescencia. Para ello, es necesario la presentación de una denuncia, las medidas de protección otorgadas por la Fiscalía pueden ser canceladas, ratificadas o modificadas, dentro de los cinco días siguientes a su imposición, por una jueza o juez.

Ahora bien, en el caso de que la víctima acuda ante un juzgado (Orden de protección de carácter jurisdiccional), la jueza o juez en turno pueden emitir una orden de protección, y estas pueden ser, entre otras, las siguientes:

- La suspensión temporal al agresor del régimen de visitas y convivencia con sus descendientes.
- Entrega inmediata de objetos de uso personal y documentos de identidad de la víctima y, en su caso, de sus hijas e hijos.
- Separar al cónyuge agresor del domicilio conyugal, así como prohibirle acudir a dicho domicilio, al lugar de trabajo, donde estudien y/o lugar determinado donde se encuentren la víctima y su familia.



PODER JUDICIAL DEL
ESTADO DE OAXACA



"2024, Bicentenario de la integración de Oaxaca a la República Mexicana"

CONSEJO DE LA JUDICATURA

Ambos tipos de órdenes de protección cuentan con diversas modalidades, y se pueden consultar en la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

En caso de inconformidad con la presente respuesta, podrá presentar el recurso de revisión en un plazo no mayor a quince días hábiles contado a partir de la notificación de la presente, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia o de la Unidad de Transparencia del Poder Judicial del Estado de manera física y/o electrónica en las direcciones señaladas al margen y calce, respectivamente; lo anterior, en términos de los preceptos 142 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 133 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca.



ATENTAMENTE.

"EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ"

C. KENIA ARLETTE BLAS RAMÍREZ

PERSONAL HABILITADO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Minutario
KABR/kvh



EN LA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, OAXACA; A SEIS DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS.

Oído que fue el Ministerio Público para resolver sobre la solicitud que realizó en relación a la ratificación de la medida de protección dentro del cuaderno de antecedentes **053/2023**, en contra del imputado *********, como probable responsable del hecho que la ley señala como el delito de **hostigamiento sexual**, cometido en agravio de **una menor de edad con iniciales *******; se procede a resolver en los siguientes términos:

CONSIDERANDO:

ÚNICO. En principio debe decirse que esta autoridad resulta ser competente para conocer y decidir sobre la solicitud del Ministerio Público en relación a precisamente la ratificación de la medida de protección.

El artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece que:

Artículo 137. Medidas de protección

El Ministerio Público, bajo su más estricta responsabilidad, ordenará fundada y motivadamente la aplicación de las medidas de protección idóneas cuando estime que el imputado representa un riesgo inminente en contra de la seguridad de la víctima u ofendido. Son medidas de protección las siguientes:

I. Prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima u ofendido;

II. Limitación para asistir o acercarse al domicilio de la víctima u ofendido o al lugar donde se encuentre;

III. Separación inmediata del domicilio;

IV. La entrega inmediata de objetos de uso personal y documentos de identidad de la víctima que tuviera en su posesión el probable responsable;

Datos Personales
protegidos por el art. 116 de la
LGTAIP, el art. 61 de la
LTAIPBGE y art. 3 fracción
VII y VIII de la LPDPPSOEO.

ORDEN DE PROTECCIÓN

V. La prohibición de realizar conductas de intimidación o molestia a la víctima u ofendido o a personas relacionados con ellos;

VI. Vigilancia en el domicilio de la víctima u ofendido;

VII. Protección policial de la víctima u ofendido;

Ahora bien, tenemos que entender que existe una gran diferencia entre las medidas cautelares y las medidas de protección; las medidas cautelares en su generalidad protegen.

Las medidas cautelares debemos entenderlas como aquellas que van encaminadas a la protección del proceso mismo; las medidas cautelares de protección personal van encaminadas hacia la limitación de la libertad del imputado y; las medidas procesales son encaminadas a (no audible).

Las tres tienen un común denominador, que es la necesidad de la cautela misma, la proporcionalidad y su justa imposición.

Si bien es cierto que, de acuerdo al precepto invocado anteriormente, el Ministerio Público puede y debe aplicar una medida cautelar en términos vagos, es decir, que debe aplicar una medida de protección, no lo exime en modo alguno del imperativo constitucional establecido en el artículo 14 y 16, es decir, fundar y motivar.

En esta audiencia yo no escuché motivación alguna por parte del Ministerio Público ni de la asesora jurídica, también noté y lo cual es evidente y no es reprochable, sino por el contrario es admirable la intención de la asesora jurídica de que se constituye en un doble aspecto como asesora jurídica y víctima indirecta; pero no hay fundamentación ni motivación, hay una denuncia, el protocolo para actuación en quienes impartimos justicia tratándose de niños, niñas y adolescentes, así como también el protocolo para una vida libre de violencia a las mujeres subsiste, pero ninguno de ellos está fuera de la fundamentación y motivación.

Si bien es cierto que, la declaración de la víctima es ponderante, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que, dicha declaración debe tener como sustento o base elementos objetivos que permitan acreditar la

ORDEN DE PROTECCIÓN



objetividad (no audible) no hay absolutamente en este momento elemento alguno; solo la declaración desafortunadamente de una niña víctima, una adolescente; pero no existe ninguna otra prueba que justifique el hecho.

Yo le entiendo abogada, daría mi vida por mis hijos, pero como abogada usted sabe que se debe corroborar, (no audible) en un ámbito relativo a resolver situación jurídica; sin embargo, si nos encontramos en que, para que un servidor pueda imponer y ratificar una medida impuesta por el Ministerio Público me deben otorgar pruebas, las cuales no existen.

La ratificación de una medida de protección implica que en su momento puedan ser revisadas, modificadas por la autoridad judicial, dentro de las cuales se establece la modificación para la imposición de una medida cautelar, medida cautelar, como bien sabemos, no puede ser impuesta si no hay una formulación de imputación, lo cual hasta este momento no existe.

De la misma manera, es cierto, existe el interés superior del niño, niña y adolescente, pero también existe el principio de presunción de inocencia; estos derechos son derechos fundamentales, en los cuales no existe antinomia entre ellos, es decir, ninguno de estos derechos están por encima del otro; nos dice Manuel Atienza, en su libro de argumentación jurídica de la editorial Trotta, en su página 89, interpretación del derecho (inaudible), lo reitera en la página 107, qué es argumentar, argumentar y (inaudible) y, finalmente, nos lo establece en la página 301, principios y reglas.

Cuando dos derechos se encuentra en colisión, usted lo dijo abogada, el juzgador debe ponderar, que es una circunstancia muy distinta a la valoración, el valor es eso, darle una valía; la ponderación, cuando los derechos entran en conflicto implica que el juzgador debe tomar en cuenta todas las aristas y, en este momento, una orden de protección me parece sumamente imposible, porque ni siquiera está probado el hecho y no quiero prejuzgar, sin embargo, de acuerdo a los hechos, repito no quiero prejuzgar, no advierto, no encuentro una sola prueba que el haber tocado la cabeza, la espalda, ni siquiera me dice en qué parte de la espalda, los hombros, sea una (inaudible), no hay ni siquiera un dictamen psicológico que me permita determinar lo anterior.

ORDEN DE PROTECCIÓN

Por ende, yo no puedo restringir un derecho fundamental del imputado, porque aparte tiene ya esa denominación y, por lo tanto, derechos, como el de presunción de inocencia, con lo relativo a la manifestación que usted hizo abogada; pero también, como usted acertadamente lo manifiesta, existe el interés superior de los niños, niñas y adolescentes.

Por ende, **no existe hasta este momento ningún elemento objetivo que me permita a mí ratificar la medida de protección impuesta**; por el contrario, al no haberlo, **se cancela toda medida**.

Por otra parte, atendiendo precisamente a la alerta de género que existe desafortadamente en nuestra entidad federativa y, en términos de los que dispone el artículo 34 quater, que nos establece de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que nos establece que las órdenes de naturaleza jurisdiccional, además de las previstas en otros ordenamientos, podrá consistir en una o varias de las acciones siguientes:

En este caso, este juzgador considera que debe aplicarse una **orden de protección en contra del hoy imputado, como lo es la obligación de alejarse de cualquier manera de la adolescente víctima en este asunto**.

La violación a esta orden judicial conllevará a los ámbitos administrativos, penales o cualquier otro que la ley determina.

Quedan notificadas las partes de la presente determinación.

Así lo determinó y firma el ciudadano licenciado **Víctor Jorge Luis Velasco Castellanos**, Juez de Control de este Circuito Judicial de Huajuapán de León, Oaxaca.



JUZGADO DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL DEL ISTMO
SEDE SALINA CRUZ, OAXACA.
RATIFICACIÓN DE MEDIDA DE PROTECCIÓN.
CDO. DE ANTECEDENTES 23/2022.
FOLIO DE AUDIENCIA: 006937/2022.



**EN LA CIUDAD Y PUERTO DE SALINA CRUZ, OAXACA, A
VEINTITRÉS DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS.**

Escuchados los argumentos de las partes se procede a resolver dentro del cuaderno de antecedentes número **23/2022**, lo relativo a la ratificación de medida de protección solicitada por la institución ministerial que fueron decretadas a favor de la menor de edad de identidad reservada e identificada con las iniciales *********, así como también a favor de ********* y *********, resolviéndose en los siguientes términos.

CONSIDERANDO.

PRIMERO. Este tribunal es competente para resolver la petición plateada con la institución ministerial en virtud de que el hecho por el cual la institución ministerial se advierte impuso las medidas de protección a las víctimas que nos ocupan, según el dato de prueba que vertió sucedió dentro de la demarcación territorial donde este Tribunal ejerce válidamente la competencia, por lo tanto se satisface esa competencia en término del artículo 20 fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales, también debe decirse que esa petición de la institución ministerial la debe conocer un juez de primera instancia especializado en materia penal como lo es el de la voz al tener la calidad de Juez de control especializado en materia penal. Aunado a lo anterior también el artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales refiere que cuando la institución ministerial decreta las medidas de protección que solicita se ratifiquen deberá de comparecer ante el juez de control dentro de los 5 días de haberla decretado para

Datos Personales
protegidos por el art. 116 de la
LGTAIP, el art. 61 de la
LTAIPBGE y art. 3 fracción
VII y VIII de la LPDPPSOE.

efecto de que en su caso se pueden ratificar, por lo tanto, este Tribunal es competente para atender la petición de la institución Ministerial.

SEGUNDO. En síntesis la institución ministerial solicita se ratifique las medidas de protección que decretó con fecha siete de abril del año dos mil veintidós, precisamente las establecidas en el artículo 136 en sus fracciones I y II del Código Nacional de Procedimientos Penales, las cuales decretó a favor de la menor víctima de iniciales *****, así como también a favor de sus progenitores ***** y *****, esto en virtud de que la misma recabó los datos probatorios como es su caso es la denuncia de la progenitora de la víctima, la declaración también de la menor víctima, es lo que puso del conocimiento en esta audiencia, en dónde se puede advertir del dicho de la menor de edad que esta persona al estar vendiendo sus productos en la playa el ahora imputado ***** realizó los tocamientos en su persona como es tocarle los senos a la menor, así como también le apretó uno de ellos y a ese dato de prueba, a esa conducta que se le está atribuyendo al imputado, hasta este momento pues es factible otórgale valor probatorio a lo que manifiesta dicha menor, es creíble, en primer término porque los hechos sobre los que está declarando la menor son hechos externos que se pueden advertir mediante los sentidos de la vista, pues al efecto la menor pudo identificar al ahora imputado, pudo advertir la conducta que él estaba realizando a su persona como son los tocamientos que realizó en su cuerpo de la manera que ya se puso de manifiesto en esta audiencia.

Ahora bien, esa declaración también se encuentra corroborada con la declaración de su progenitora pues se pudo advertir de la declaración de la progenitora de la menor que en la fecha de los hechos, aproximadamente como a las catorce horas cuando estaba vendiendo sus productos se dirigía su menor hija hacia su persona y traía un billete de \$20.00 y la interrogó en relación a la procedencia de ese dinero y posteriormente la misma le manifestó que efectivamente el imputado le había realizado esos tocamientos en su cuerpo, que ante esa situación conjuntamente con su esposo progenitor de la víctima, fueron hacia el lugar en donde les indicó la menor y le reclamaron la conducta al ahora imputado, refiere la progenitora que efectivamente el imputado aceptó haber realizado esa conducta y al efecto también obra la declaración de la progenitora posterior a la primera declaración, donde hace la indicación que estando en su domicilio llega la hija y el cuñado del señor ***** y se advierte quiere conciliar en relación a la conducta atribuida al ahora imputado, a esas declaraciones es factible otorgarle valor probatorio, que si bien no es una testigo presencial de los hechos, es decir, que haya apreciado la conducta realizada por el imputado sin embargo debemos de tomar en cuenta que esa testigo se trata de la progenitora de la víctima, con la cual tiene contacto, es decir, por esa convivencia que tiene de la menor sabe cuándo su hija le está mintiendo, sabe en su momento los cambios de su estado emocional y es por ello que se pudo dar cuenta que la menor de edad le estaba mintiendo al inicio en relación a los \$20.00 que traía y es por ello que la pudo interrogar y debido a la confianza de la menor que guarda con su progenitora pues le contó lo sucedido, circunstancia que por ese parentesco que tiene con la víctima está en condiciones de validar todo lo que le manifestó su menor hija,



razón por la cual esta autoridad determina que efectivamente tiene valor probatorio la declaración de la progenitora.

Si bien es cierto la institución ministerial como lo indicó el defensor, no expuso las razones de cuál era la razón por la que impuso esas medidas de protección a la víctima, sin embargo debemos analizar también que estamos en presencia de un asunto de naturaleza sexual y probablemente se cometió en una persona menor de edad del sexo femenino, es decir, es una niña la víctima que nos ocupa, luego entonces al estar en conflicto los derechos de un adulto como son los del imputado y los derechos de un menor, debemos también atender el interés superior del menor, es decir que cuando nos encontramos en un conflicto de esa naturaleza un menor con un adulto debemos de ser prioritarios en garantizarles los derechos a un menor y proteger al menor de edad, es evidente que de los datos de prueba la institución ministerial advirtió el riesgo no solo el que corre la menor víctima hacia su integridad, sino también el riesgo que corren los progenitores pues se pudo advertir del dato de prueba consistente en la declaración de la progenitora que llegaron familiares del imputado hasta su domicilio para tratar de conciliar esa conducta atribuible al imputado.

Luego entonces esta autoridad determina que efectivamente la institución ministerial tenía elementos suficientes para decretar las medidas de protección que solicita se ratifique y por consecuencia de ello esta autoridad al determinar que efectivamente existe un riesgo para la integridad y la libertad de la menor y también un riesgo en la persona de sus progenitores, determina **ratificar las medidas de protección que indicó la**

institución ministerial y que se precisa son las que establece el artículo 137 en sus fracciones I y II:

"I. Prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima u ofendido;

II. Limitación para asistir o acercarse al domicilio de la víctima u ofendido o al lugar donde se encuentre;"

Las cuales tendrán una vigencia de sesenta días, que se pueda prorrogar por treinta días o en su caso **hasta en tanto subsista el riesgo para las víctimas que nos ocupan.**

Se le hace la indicación a la institución ministerial que la vigilancia de esas medidas de protección quedara a su cargo, es decir, tendrá que vigilar que se cumplan esas medidas, independientemente de ello se ordena transcribir la determinación y notificarle la misma al ahora imputado para efecto que dé cabal cumplimiento a las medidas de protección que en su momento decretó la institución ministerial y que fueron ratificadas por esta autoridad.

Se comisiona al personal del juzgado para que realice la notificación y requerimiento al imputado, sin embargo, la vigilancia de las medidas queda a cargo de la institución ministerial.

Quedan legalmente notificados de esta determinación las partes presentes.

Así lo resolvió y firma el Licenciado **Guillermo Martín Martínez Maldonado**, Juez de Control de este Circuito Judicial del Istmo, con sede en Salina Cruz, Oaxaca.

Datos Personales
protegidos por el art. 116 de la
LGTAIP, el art. 61 de la
LTAIPBGE y art. 3 fracción
VII y VIII de la LPDPPSOEO.





JUZGADO DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL DEL ISTMO.
SEDE SALINA CRUZ, OAXACA.

INCIDENTE

CDO. DE ANTECEDENTE: 59/2021
FOLIO DE AUDIENCIA: 022046/2021.



CONSEJO DE LA JUDICATURA
JUZGADO DE CONTROL
DE SALINA CRUZ

**EN LA CIUDAD Y PUERTO DE SALINA CRUZ, OAXACA, A
TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL DOS MIL VEINTIUNO.**

Tomando en consideración lo manifestado por el asesor jurídico y la víctima en esta audiencia, a efecto de resolver esta circunstancias que ha solicitado y que ha referido el agente del Ministerio Público de acuerdo a lo que establece el artículo 258 del código Nacional de Procedimientos Penales que se plantea el incidente por parte de la víctima *****, relativo a omisiones que refiere a incurrido el agente del Ministerio Público en la carpeta de investigación número *****, que se instruye en contra del imputado *****, por su probable participación en el hecho que la leyenda señala como el **delito de violencia familiar** por ello se procede a resolver en término de los siguientes

CONSIDERANDOS:

Primero. La competencia de este juzgador se encuentra determinado en razón de la materia, del grado y el territorio, puesto que el de la voz es un juez en materia penal y el asunto es del conocimiento de un juez de primer grado cómo lo es el suscrito y de igual manera los hechos que pone a consideración el asesor jurídico y la víctima sucedieron dentro del ámbito de este Distrito judicial, tal como se advierte de su escrito presentado ante este órgano jurisdiccional, por ello queda establecida esa competencia de acuerdo a lo que establece el artículo 1 y 20 fracción I del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Segundo. El agente del Ministerio Público como lo hizo referencia el asesor jurídico tiene facultades para el ejercicio de la acción penal o bien dictar como lo refieren los artículos 253, 254 y 255 del Código

Nacional de Procedimientos Penales, son las facultades de abstenerse de investigar, el archivo temporal y la determinación del ejercicio de la acción penal y si bien es cierto el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece los motivos por los cuales podrán promoverse incidentes cuando el agente Ministerio Público haya dictado alguna de las ya mencionadas, lo cierto es que dicho numeral es meramente enunciativo más no limitativo y que en el caso engloba las omisiones del ministerio público en sus actuaciones de manera general, el cual ha hecho valer en este caso la víctima *****, con asesoría de su abogado, por ello en termino de lo que establecen los artículos 17 y 20 fracción VII de la Constitución Federal, 25.1 de la Convención Americana de los Derechos Humanos y 7 de la Ley General de víctimas, es procedente analizar la petición que ha planteado la víctima en esta audiencia con asesoría de su abogado.

Tercero. Una vez escuchada las partes procesales en esta audiencia respecto al análisis de la posibilidad de corroborar las omisiones del agente del ministerio público en la imposición de la medida cautelar que solicita la víctima, como es la establecida en la fracción X del artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para ello considera este órgano jurisdiccional que es fundamental poder determinar las circunstancias de los hechos que puso a consideración al agente del ministerio público para efectos de determinar si de las circunstancias que puso a consideración del agente del ministerio público se advierte un riesgo real para la víctima, y de esta audiencia únicamente se puede advertir, que presentaron denuncia en contra de *****, mediante comparecencia de fecha diecisiete de diciembre del año dos mil veintiuno, sin embargo, no aporta mayores elementos probatorios de los cuales podría determinar en mi calidad de juez que en efecto el agente del Ministerio Público está

Datos Personales
protegidos por el art. 116 de la
LGTAP, el art. 61 de la
LTAIPBGE y art. 3 fracción
VII y VIII de la LPDPPSOEO.



JUZGADO DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL DEL ISTMO.
SEDE SALINA CRUZ, OAXACA.

INCIDENTE

CDO. DE ANTECEDENTE: 59/2021
FOLIO DE AUDIENCIA: 022046/2021.



siendo omiso al analizar esos datos de prueba y darse cuenta de que existe un riesgo para la víctima y aun así no impone esas medidas de protección a la víctima, tomando en consideración lo anterior, el asesor jurídico debió de establecer cuáles fueron esas circunstancias de hecho que puso a consideración de la representación social, y lo único que se advierte es lo que hace referencia la víctima, que sufrió violencia con fecha nueve de diciembre del año dos mil veintiuno y esto se advierte únicamente de su escrito que presentó ante este juzgado, no se advierte cual fue el contexto de esta violencia, no acreditada hasta este momento si en efecto existe alteraciones psicológicas con algún dato de prueba objetivo, si existe alguna alteración física de manera objetiva que haya acreditado ante el agente Ministerio Público mediante alguna certificación que le hayan realizado a la víctima para que pudiera este órgano jurisdiccional en término de lo que establece el artículo 40 fracción V del reglamento de la Ley General de Acceso a la Mujer a una vida libre de violencia, poder determinar y analizar ese riesgo que existe en contra de la víctima, estos riesgos podrían ser analizados de esa manera para evaluar la seguridad o inseguridad de la víctima en el contexto en el cual se desarrolla ella, si es en este caso una persona vulnerable en cuanto a que sea agredida de manera consecutiva o si ha sido agredida de manera reiterada por parte de dicho imputado, para que en su caso se pudieran identificar las medidas de protección para asegurar la integridad de la víctima, estas medidas tendrían que ser medidas idóneas que sirvan para disminuir o evitar el riesgo que se pudiera haber identificado a través de esos datos que debió haber puesto en consideración el asesor jurídico.

En este caso si bien es cierto hace referencia que fue otorgado por parte de la representación social las medidas de protección establecidas en los artículos 137, en su fracciones I, IV, V y VIII del Código Nacional

de Procedimientos Penales, de manera superficial atendiendo a lo que han manifestado en esta audiencia podría determinar que son medidas idóneas para la prevención del riesgo que tiene la víctima, ya que el otorgamiento de las órdenes de protección emergentes y preventivas se debe de realizar de acuerdo a lo que establece el artículo 40 del Reglamento de la Ley General de acceso a una vida libre de violencia, el cual establece:

“ARTÍCULO 40.- *El otorgamiento de las órdenes de protección, emergentes y preventivas, se realizará de acuerdo a las siguientes disposiciones:*

V. La autoridad jurisdiccional competente podrá considerar para otorgar las órdenes de protección, si de la declaración o entrevista de la Víctima o solicitante se desprende alguno o algunos de los siguientes supuestos:

a) Ataques previos con riesgo mortal, amenazas de muerte, o el temor de la Víctima a que el agresor la prive de la vida;

b) Que la Víctima esté aislada o retenida por el Agresor contra su voluntad o lo haya estado previamente;

c) Aumento de la frecuencia o gravedad de la violencia;

d) Que la Víctima, como consecuencia de las agresiones sufridas, haya o esté recibiendo atención médica;

e) Intento o amenazas de suicidio o cualquier otra forma de medida intimidatoria por parte del Agresor;

f) Que el Agresor tenga una acusación o condena previa por delitos contra la integridad física o sexual de personas; que cuente con antecedentes de órdenes de protección dictadas en su contra; tenga antecedentes de violencia que impliquen una conducta agresiva o de peligrosidad; o que tenga conocimiento en el uso de armas, acceso a ellas o porte alguno;

g) Cuando existan antecedentes de abuso físico o sexual del agresor contra ascendientes, descendientes o familiares de cualquier grado de la Víctima, o

Datos Personales
protegidos por el art. 116 de la
LGTAIP, el art. 61 de la
LTAIPBGE y art. 3 fracción
VII y VIII de la LPDPPSOEO.



JUZGADO DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL DEL ISTMO.
SEDE SALINA CRUZ, OAXACA.
INCIDENTE
CDO. DE ANTECEDENTE: 59/2021
FOLIO DE AUDIENCIA: 022046/2021.



CONSEJO DE LA JUDICATURA
JUZGADO DE CONTROL
DE SALINA CRUZ

h) Que exista o haya existido amenaza por parte del Agresor de llevarse a los hijos de la víctima por cualquier circunstancia.

Para los efectos de este artículo, debe tomarse en cuenta, al momento de evaluar el riesgo, si existe recurrencia de violencia y la posibilidad para la víctima de salir de ésta."

Por ello, y tomando en consideración este dispositivo a que ya se ha hecho referencia, podemos determinar únicamente con lo manifestado en esta audiencia por parte del asesor jurídico y de la víctima esa circunstancia de incumplimiento de las medidas de protección otorgadas por el agente del ministerio público, las cuales refiere no fue acatada por parte de dicho imputado y respecto a la medida de protección establecida en la fracción X del artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el reingreso de la víctima a su domicilio, en este caso tomando en consideración las circunstancias que han manifestado en esta audiencia que se trata de un entorno en donde la víctima vive cerca de los familiares del agresor y que es posible que el propio agresor viva en el domicilio de los padres, debe de tomarse en consideración esta circunstancia a efecto de otorgar o no esa medida de protección y esto debe ser precisamente una medida idónea a efecto de garantizar a la víctima en cuanto a la agresión que se pudiera dar por parte de dicho imputado, y esa agresión no únicamente debe ser de manera física, sino que también ese constante contacto que pudiera tener la víctima al ser ingresada a dicho domicilio, y que puede estar visualizando de manera directa tanto al agresor como a los familiares de este, con una gran posibilidad que se pueda generar una mayor probabilidad de alterar su estado emocional, de ahí que el peligro sí es objetivo y existe hacia la víctima del delito en caso de ser ingresada a su domicilio, como se advierte de la propia manifestación realizada por la víctima, por ello tomando en consideración este contexto que ha narrado la víctima en esta audiencia considera este órgano

jurisdiccional que sería no garantizarle su integridad tanto física como psicológica de acceder a su petición, tanto de ella como de su menor hijo de iniciales *****, esto únicamente cómo se ha hecho referencia atendiendo a lo que han manifestado en esta audiencia y esto desde luego tomando en consideración que por lo que respecta al artículo 27 de la Ley General de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, faculta a este órgano jurisdiccional para que inmediatamente después de que se tenga conocimiento de un hecho en dónde se implique violencia en contra una mujer este órgano jurisdiccional pueda estimar lo necesario e imponer una orden de protección a favor de la víctima del delito en función también del interés superior del menor, que en este caso es el hijo de la incidentista.

En el caso que nos ocupa como se ha hecho mención no sé advierte algún dato de prueba que haya vertido el asesor jurídico para efecto de corroborar el contexto de violencia que se ha generado con esos hechos y que haya realizado el hoy imputado, pues a juicio de este órgano jurisdiccional se deben de satisfacer diversos requisitos como lo prevé el artículo 31 de la Ley General de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia y que son necesarios para la procedencia de una orden de protección pues con el acto que se cometió o que se dice cometido en agravio de la víctima *****, fue que el imputado refiere la agredió de manera física, psicológica y patrimonial, circunstancias que desde luego se toma en consideración pero faltan datos de prueba que corroboren el mismo, sin embargo tomando en consideración de que desde luego podríamos estimar que existe un riesgo o peligro hacia su persona en su calidad de víctima, se puede tomar en consideración que el agente del Ministerio Público otorgó las medidas que consideró necesarias e idóneas para la protección de su integridad física y la reiteración y de esas agresiones por parte del imputado.

Datos Personales
protegidos por el art. 116 de la
LGTAIP, el art. 61 de la
LTAIPBGeo y art. 3 fracción
VII y VIII de la LPDPPSOEO.



JUZGADO DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL DEL ISTMO.
SEDE SALINA CRUZ, OAXACA.
INCIDENTE
CDO. DE ANTECEDENTE: 59/2021
FOLIO DE AUDIENCIA: 022046/2021.



Tomando en consideración lo anterior en término de lo que disponen los artículos 28 fracción I y 29 fracción II y IV la Ley General de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia y sin que sea obstáculo que la propia víctima y su asesor no hayan argumentado los datos necesarios para la procedencia de las omisiones en las que se dice incurrió el agente del Ministerio Público al no imponerse la medida que solicita el asesor jurídico establecido en el artículo 137 fracción X, únicamente **este órgano jurisdiccional atendiendo a las manifestaciones que hace la víctima, corrobora las medidas impuestas por el agente del Ministerio Público hacia la víctima,** además de ello debe de tomarse en consideración para lo anterior que debe de satisfacerse esas dos hipótesis que se han hecho referencia de acuerdo a lo que establece el dispositivo antes mencionado, dichas medidas **consisten en las establecidas en las fracciones I, IV, V, VIII y IX** del artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales:

"I. Prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima u ofendido;

IV. La entrega inmediata de objetos de uso personal y documentos de identidad de la víctima que tuviera en su posesión el probable responsable;

V. La prohibición de realizar conductas de intimidación o molestia a la víctima u ofendido o a personas relacionados con ellos;

VIII. Auxilio inmediato por integrantes de instituciones policiales, al domicilio en donde se localice o se encuentre la víctima u ofendido en el momento de solicitarlo

IX. Traslado de la víctima u ofendido a refugios o albergues temporales, así como de sus descendientes (...)"

Para esta última fracción **se requiere a la Representación Social para efecto de designar en caso de ser voluntad de la víctima ser trasladada a uno de esos albergues con los que cuenta la fiscalía.**

Por lo que toca al hecho narrado en esta audiencia por parte de la víctima en cuanto a los actos realizados por los padres del imputado y en cuanto al despojo que refiere de su vivienda, se dejan a salvo los derechos de la víctima para que los haga valer como corresponda ya que considera este órgano jurisdiccional que podría tratarse de un hecho con características de delito, por el cual puede tomar acciones penales en contra de dichas personas, esto para que el agente del ministerio público al tener conocimiento de ellos pueda iniciar la integración de la carpeta de investigación por la posibilidad del delito de despojo que establece el artículo 384 fracción I de Código Penal del Estado.

Tomando en consideración lo anterior quedan notificadas las partes de la presente determinación que se ha tomado.

Así lo firma y resuelve el Licenciado **Iván Alberto Villalana Villalobos**, Juez de Control de este Distrito Judicial.



JUZGADO DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL DEL ISTMO
SEDE SALINA CRUZ, OAXACA.
RATIFICACIÓN DE MEDIDA DE PROTECCIÓN
CUADERNO DE ANTECEDENTES 000026/2022.
FOLIO DE AUDIENCIA: 008730/2022.

EN LA CIUDAD Y PUERTO DE SALINA CRUZ, OAXACA, A VEINTE
DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS.



Escuchadas las exposiciones de las partes se procede a resolver dentro del cuaderno de antecedentes número **26/2022**, lo relativo a la petición planteada por la Institución Ministerial, consistente en la ratificación de Medidas de Protección decretadas a favor de las menores víctimas identificadas con las iniciales *******. y *****.**, quien refiere ser víctimas del ilícito de **Abandono de personas** y que se le atribuye al ahora imputado *********, resolviéndose en los siguientes términos:

CONSIDERANDO.

ÚNICO. En síntesis, la Institución Ministerial solicita se ratifique las medidas de protección que decretó con fecha 16 de mayo del año en curso a favor de los menores de edad antes indicados consistentes en el artículo 137 en su fracción I y II del Código Nacional de Procedimientos Penales, esto en base a los argumentos que expuso en esta audiencia y en base a los datos de prueba que desahogó.

Para efecto de decretar una medida de protección es fundamental determinar que efectivamente existe un riesgo en base a la existencia de una violencia por parte del ahora imputado *********, entendemos por violencia es el uso excesivo de la fuerza, ya sea física o de poder por parte del imputado, esto con una

Datos Personales
protegidos por el art. 116 de la
LGTAIP, el art. 61 de la
LTAIPBGE y art. 3 fracción
VII y VIII de la LPDPPSOEO.



finalidad, la violencia se ejerce con una finalidad en su caso de agredir o causar ciertas lesiones hacia la víctima.

Si bien, no tenemos ningún dato de prueba que demuestre de manera directa la agresión, la violencia por parte del imputado hacia los menores, de los cuales solicita la ratificación de medida de protección, pero podemos inferir del dato de la denuncia correspondiente del Procurador, donde él se constituye al domicilio donde estaban los menores y realizan también la inspección, inclusive hacen referencia que entrevistan a una persona del lugar y les indica que el ahora imputado resulta ser una persona muy agresiva, así también la opinión psicológica por parte de la perito de la Fiscalía al entrevistar al menor de edad, también refirió que su progenitor el ahora imputado ha agredido tanto a su madre como a él, así también a mayor abundamiento se puede advertir las condiciones en las cuales se encuentran estos menores de edad, están pasando un cuadro de desnutrición se ven que no hay una buena atención hacia su persona pero lo fundamental es que esta autoridad puede determinar que efectivamente existe una violencia de parte del imputado hacia los menores, razón suficiente para ratificar las medidas de protección que decretó la Institución Ministerial, porque existe ese riesgo de que se continúe con la agresión por parte del imputado hacia los menores y la finalidad de la ratificación de esas medidas de protección es garantizar la integridad física y emocional de estas personas.

Por lo tanto, **se determina ratificar las medidas de protección que decretó la Institución Ministerial, con fecha 16 de mayo del año 2022**, las previstas en el **artículo 137**, en sus fracciones I y II, las cuales quedarán a cargo de la vigilancia de la Institución Ministerial,



también se le hace la indicación que de acuerdo a lo que establece el **artículo 139**, esas medidas de protección **tendrán una duración máxima de 60 días naturales**, prorrogables hasta por 30 días más, de acuerdo a ese dispositivo.

Se le requiere a la Institución Ministerial para efecto de poder notificar al imputado que proporcione el domicilio exacto del imputado, si es posible con un croquis para efecto de poder localizarlo y si para ese efecto se le concede el plazo de tres días para que proporcione el mismo, de lo contrario quedará a cargo su notificación de esta determinación al imputado.

Así lo resolvió y firma el Licenciado **Guillermo Martín Martínez Maldonado**, Juez de Control de este Circuito Judicial del Istmo, con sede en Salina Cruz, Oaxaca.



Datos Personales
protegidos por el art. 116 de la
LGTAIP, el art. 61 de la
LTAIPBGE y art. 3 fracción
VII y VIII de la LPDPPSOEO.



Por una justicia incluyente
y de derechos humanos